

Tensión en el Poder Judicial peruano:

Fiscales de Lava Jato acusan al fujimorismo de maniobras para removerlos y bloquear el caso

El fiscal Pérez dijo que Keiko Fujimori ha presionado a las autoridades del Ministerio Público para boicotear la investigación.

JEAN PALOU EGOAGUIRRE

El caso de corrupción Lava Jato suma un nuevo capítulo en Perú, que refleja las fuertes tensiones entre la política y el Poder Judicial, en la medida en que se acerca la fecha del inicio del juicio oral en contra de la excandidata presidencial Keiko Fujimori el próximo 1 de julio, una causa en la que la líder del partido Fuerza Popular arriesga hasta 30 años de cárcel.

En la antesala del juicio, los fiscales del equipo especial Lava Jato denunciaron que el fujimorismo realizó gestiones y presionó a las máximas autoridades del propio Ministerio Público para remover de sus cargos a los actuales investigadores, boicotear sus pesquisas y apartar a los testigos clave.

“La actividad criminal de Fuerza Popular continúa en el presente y ha tenido injerencia nuevamente en la Fiscalía de la Nación”, sostuvo el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, al acusar que Fujimori intentó tomar el control del Ministerio Público cuando estaba bajo el liderazgo de la ahora suspendida fiscal general, Patricia Benavides, quien habría buscado excusas para suspender y luego destituir a los investigadores del caso. “Estos fiscales y todos los que vayan a intervenir en el juicio van a tener temor, miedo, preocupación de poder cometer actos que puedan afectar los intereses de quien ya tomó el control de la Fiscalía (...) y me refiero a la acusada Keiko Fujimori, y al partido también acusado, Fuerza Popular”, reiteró.

Junto a Pérez estaba el coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, quien luego de seis años en el cargo fue suspendido durante ocho meses en noviembre por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, luego de “haber emitido expresiones impropias”, en referencia a sus críticas a la liberación en 2020 de Fujimori, quien se encontraba en prisión preventiva. “Hay interés



KEIKO FUJIMORI fue candidata presidencial en 2011, 2016 y 2021 y actualmente tiene prohibición de salir del país.

de partidos políticos para afectar el proceso (...). Buscan no solo lo que han conseguido conmigo, que es mi remoción del equipo fiscal, sino destruir toda la operación”, advirtió, al destacar que “el caso se puede caer” en medio de las presiones que alientan la impunidad. “Enfrentamos una campaña de desprestigio”.

Las presiones, sostuvo el fiscal, provienen no solo del fujimorismo, sino de todos los involucrados que están implicados en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Perú. “Todos los involucrados en el caso de Lava Jato, estamos hablando de expresidentes constitucionales de la República, exministros, empresarios de muy alto perfil (...), están incluidos dentro del entramado y

ahora están en fases finales. Ciertamente, quieren afectar no solo la credibilidad de los operadores de justicia, sino también los mecanismos de legalidad”, afirmó Vela.

La fiscalía ha solicitado 30 años de prisión a Keiko Fujimori por la presunta comisión de delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, así como la disolución del partido Fuerza Popular.

Las críticas de los fiscales de Lava Jato se produjeron en medio del ruido que ha provocado la filtración del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal general Patricia Benavides, quien fue detenido por su participación en una supuesta red de tráfico de influen-

cias liderada presuntamente por su exjefa. Villanueva se acogió a la colaboración eficaz para declarar sobre los supuestos pactos de la fiscal general con congresistas que buscaban archivar investigaciones, a cambio de lo cual le daban a Benavides los votos para direccionar procesos en el Congreso.

En una parte de su declaración, Villanueva reconoció que fue contactado por la congresista fujimorista Martha Moyano, quien a través suyo le pidió a Benavides que destituyera a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. El plan para sacarlos de la investigación suponía inventar cargos falsos, denunciarlos ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, suspenderlos de sus funciones y luego destituirlos, tal como ocurrió con Vela.

“Con la declaración de Jaime Villanueva, quedó en claro la solicitud que le estaba haciendo la ‘alta dirección’ de Fuerza Popular a la propia fiscal de la Nación, Patricia

Benavides. Esto tiene que ser calificado como una actuación ilícita (...). La institución (el Ministerio Público) estaba tomada por los intereses de un determinado partido político”, destacó el fiscal Pérez.

Según Villanueva, en el propio nombramiento de Benavides como fiscal de la Nación en 2022 por parte de la Junta Nacional de Justicia intervinieron dirigentes y abogados que estaban directamente acusados en Lava Jato o tenían clientes que lo estaban. Ya en el cargo, Benavides logró notoriedad por procesar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), para lo que contó con el apoyo del fujimorismo, pero en diciembre pasado fue suspendida por seis meses de sus funciones tras la detención de su exasesor, el allanamiento de sus oficinas como parte de la “operación Valkiria V” y la acusación de una fiscal anticorrupción de que supuestamente encabezó una red de tráfico de influencias.

En medio de este enredo, la de-

fensa de Fujimori tomó las mismas declaraciones de Villanueva, pero las interpretó como una muestra de lo “parcial” de la indagatoria, al resaltar la mención de reuniones previas entre Pérez, Vela y el reconocido periodista de investigación Gustavo Gorriti. “Las recientes declaraciones (de Villanueva) evidenciarían un sesgo en su contra y una falta de objetividad en su actuar”, declaró Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que informó que solicitará formalmente “la exclusión” de Pérez y Vela.

“A mi entender, aquí hay oportunos políticos y jurídicos. Las revelaciones que ha habido sobre Pérez, Vela y Gorriti es un material que está tratando de explotar el fujimorismo para que pierda fuerza el caso. Pero no es que el caso esté cuestionado o viciado, no es así. Está por entrar a juicio oral y el fujimorismo lo que busca es la oportunidad para tratar de evitar que el fiscal Pérez siga”, explicó el abogado penalista Dino Carlos Caro. “Vela ya está fuera del sistema, una vez que termine de cumplir su sanción de ocho meses él va a volver a otro puesto, pero ya no en Lava Jato. Yo creo que el proceso se debilita bastante porque él conocía bien los casos y de la gestión, pero tampoco es que los procesos se van a perder (...). No es que viene un nuevo fiscal y dice ‘acá no hay caso y se archiva’. Los fiscales van a ir hasta el final”, añadió.

Un experto del sector jurídico, que prefirió mantener el anonimato por “lo sensible” del caso, resaltó que “hay mucho por extraer aún, pero el panorama pinta muy mal para las instituciones de justicia” en Perú. “Villanueva es peligroso y un actor político claro. No está del todo claro a dónde está apuntando, pero uno de sus objetivos es, al parecer, darle sustento a cierta narrativa de que el caso contra Fuerza Popular es parte de un complot político armado por ciertos sectores. Con esa narrativa los implicados piden ahora la nulidad de los procesos. Se ataca no solo a los fiscales de Lava Jato, sino al Ministerio Público como institución, que según esta versión sería una institución manipulable por cierto periodista que tendría capacidad de designar equipos de fiscales, iniciar pesquisas, abrir o archivar casos, lograr presiones, etc. Para los especialistas y para cualquiera que conoce un poco cómo funciona la justicia, es una trama absurda, pero apuestan al gran público”.